

Revista Energética



Energy Magazine

**Año 15
número 1
enero-abril 1991**

**Year 15
number 1
January-April 1991**



**Tema: Participación de la iniciativa privada
en el Sector Energético**

**Topic: Participation of private initiatives
in the energy sector**



Sector Energía: La Experiencia Chilena*

Ing. Sergio Lorenzini**

Para comprender las políticas seguidas en Chile en relación con el sector energía y la que está aplicando el actual Gobierno, es conveniente comenzar por dar una breve síntesis del sector en nuestro país.

1. SINTESIS DEL SECTOR ENERGIA EN CHILE

a. Breve reseña histórica

El sector energía ha tenido, desde sus comienzos, un gran dinamismo en nuestro país. Su desarrollo industrial comenzó a mediados del siglo pasado con el carbón y en las últimas décadas de ese siglo con la electricidad. Es de notar que las diversas aplicaciones de la electricidad se comenzaron a realizar en Chile casi simultáneamente con la de los grandes países industrializados. Así, por ejemplo, el primer alumbrado público se efectuó en 1883 y la primera central hidroeléctrica en 1887.

Hasta 1940 el desarrollo energético fue acometido exclusivamente por empresas privadas, tanto chilenas como extranjeras, lográndose altos ritmos de crecimiento hasta 1930 (17% anual en promedio).

La crisis mundial de 1930, que repercutió dramáticamente en nuestro país, y la Segunda Guerra Mundial limitaron la capacidad financiera de las empresas, las que no

podieron seguir invirtiendo. Por ello el Estado debió, a partir de 1940, tomar a su cargo gran parte del desarrollo eléctrico y la prospección de petróleo a través de sus empresas ENDESA y ENAP respectivamente. En todo caso, el sector privado continuó haciendo inversiones en el sector hasta 1970.

Entre 1970 y 1973 virtualmente todas las empresas de energía fueron estatizadas, situación que se mantuvo hasta 1980. Fue una década de total estatización.

A partir de 1980 se inició un acelerado proceso de privatización de las empresas estatales, en forma tal que a comienzos del actual Gobierno la mayoría de las empresas eran privadas.

b. Situación actual del sector en relación con la propiedad de las empresas

Electricidad: Más del 80% del servicio público es atendido por empresas generadoras privadas. En el Sistema Interconectado Central, en que está el 90% de la población, sólo hay una empresa estatal, que genera menos del 20% de esa demanda. Toda la distribución eléctrica es privada. Es de notar que casi el 70% de la electricidad es de origen hidráulico.

Carbón: Existe una sola empresa estatal, que produce el 30% de la demanda. Todas las demás son privadas.

Petróleo: La producción y refinación del petróleo son efectuadas por una empresa estatal, ENAP. Sin embargo ya hay cinco consorcios mixtos, con participación minoritaria de ENAP, que están efectuando prospecciones petroleras para producir y vender petróleo. Toda la distribución de derivados del petróleo es privada.

c. Un vistazo a las posibilidades de abastecimiento futuro

- Las reservas hidroeléctricas son muy importantes en nuestro país. Sólo se ha utilizado el 10% de las disponibilidades económicas de hidroelectricidad.
- Las reservas de carbón son enormes (más de 5 mil millones de toneladas) suficientes para atender las necesidades del país para varios siglos.
- La producción de petróleo nacional, sin embargo, está disminuyendo fuertemente debido al agotamiento de las reservas conocidas de Magallanes. Representa actualmente menos del 20% del consumo del país.

2. POLITICA DEL GOBIERNO EN EL SECTOR

a. Aspectos generales de la política

La política del Gobierno en el sector energía es, naturalmente,

* Conferencia dictada en el Instituto de las Américas, junio de 1990.

** Secretario Ejecutivo, Comisión Nacional de Energía de Chile

concordante con su política económica general.

Uno de los primeros aspectos que debió definir el equipo económico, antes de asumir el Gobierno, fue el papel que el Estado debía tener en la economía. Para ello, los partidos que conforman el actual Gobierno hicieron un profundo análisis de la realidad nacional. Y se vio que, a pesar de las discusiones que pudo haber habido en los últimos 20 años respecto a la conducción económica del país, nos encontramos ante hechos claros y positivos.

La situación económica general es sana. Prácticamente no hay déficit fiscal desde hace varios años. La inflación está bajo control, con tasas razonables para nuestro país. Los precios de los diversos bienes y servicios no tienen distorsiones: son libres y están determinados por la competencia interna y externa. Sólo están controlados los precios en caso de monopolios (como la distribución de electricidad). La economía está abierta al exterior desde hace muchos años, con bajos derechos de aduana (15%). En fin, en los últimos años ha habido un crecimiento apreciable del producto.

Esta es una base sólida, logra-

Uno de los primeros aspectos que debió definir el equipo económico, antes de asumir el Gobierno, fue el papel que el Estado debía tener en la economía

da, sin duda, con el sacrificio de todos los chilenos y, en particular, de los más pobres.

Sin embargo, es necesario considerar aspectos que son preocupantes y que deben ser controlados: el alto nivel de endeudamiento externo; la situación económica de los sectores más pobres; y la necesidad de mantener un ritmo de crecimiento de la economía que permita resolver estos problemas y salir del subdesarrollo. El nuevo Gobierno determinó que era necesario que los siempre escasos fondos fiscales se destinaran preferentemente a resolver los problemas sociales y que fuera el sector privado el principal motor del desarrollo.

Para lograrlo, el Gobierno ha adoptado una clara política de promover la máxima participación privada en el desarrollo del país. Esto le permitirá utilizar los fondos fiscales en vivienda, educación, salud, otras ayudas a los sectores más pobres y financiar aquellas actividades que difícilmente aborarán los privados (obras públicas, por ejemplo).

El Gobierno está consciente de que la cuestión de la participación privada y estatal en la economía ha estado sujeta, en nuestro país, a discusiones no exentas de vehemencia. Está también consciente de que la acción de las empresas estatales fue eficaz y hasta necesaria en el pasado por las circunstancias que mencionamos al comienzo.

Sin embargo, en nuestro país y en el mundo han sucedido hechos que se deben valorar. Uno de ellos es el extraordinario avance del conocimiento de la economía y de las técnicas de administración y de informática. Los logros en estas disciplinas constituyen herramientas inapreciables en el manejo de la economía y en la dirección del desarrollo.

Elas permiten confirmar planteamientos que han estado en discusión, como los siguientes:

- Que el Estado puede dirigir y controlar eficientemente la economía y el desarrollo del país, sin necesidad de participar directamente, a través de empresas estatales, en los procesos productivos.
- Que la mayor eficiencia económica se obtiene con una adecuada descentralización en los procesos productivos y de administración, en un régimen de competencia, en la cual los diversos actores y agentes económicos asuman las responsabilidades, los riesgos y los beneficios de sus propias decisiones.
- Que, en fin, los siempre escasos fondos fiscales tienen una mayor rentabilidad para el país si se les emplea eficientemente en mejorar las condiciones sociales y culturales de la población, y en otras actividades que le corresponde al Estado de acuerdo con su misión de velar por el bien común. Ello es más eficiente para el país que invertir estos fondos directamente en los procesos productivos.

b. Política para el sector energía

Por consiguiente, la política del Gobierno para el sector energía descansa en cuatro pilares fundamentales:

1. **Promoción de la máxima participación privada** en el desarrollo del sector, de modo que sea el principal motor de la economía. Sólo en casos de insuficiencias del sector privado, el Estado deberá desarrollar directamente los proyectos que se demuestren necesarios.
2. **Política de precios.** Los precios deben corresponder a los costos reales de producción y distribución y deben quedar determinados por la competencia interna y externa de los diversos productos energéticos. Existe, por lo tanto, libertad de importación para todos ellos, con bajos dere-

chos de aduana, al igual que todos los bienes. El Gobierno está interesado en promover la mayor competencia posible.

Solamente existe regulación de precios en el caso de monopolios, cuyo ejemplo más importante es el de la distribución eléctrica. Esta regulación se efectúa considerando los costos reales de los productos, incluyendo una rentabilidad razonable, y mediante sistemas que simulen un mercado competitivo (costos marginales).

3. **Papel del Estado.** El papel fundamental del Estado es de carácter normativo, promotor y de control. Dada la importancia de la energía, el Estado debe asegurar un oportuno y armónico desarrollo del sector, de modo que la demanda sea satisfecha a los costos más bajos posible. Para ello, el Estado debe establecer las normas y reglas del juego a que deben someterse las empresas y controlar eficazmente que ellas sean respetadas.

Por otra parte, dadas las características del sector energía, uno de cuyos aspectos es el largo desarrollo de los proyectos, el Estado efectúa una planificación estratégica indicativa y pone los antecedentes y resultados a disposición de los interesados.

4. **Estabilidad de las políticas.** Esto es un aspecto fundamental, porque sólo la estabilidad en el tiempo de cualquier política puede rendir los frutos que se espera de ella. Esto es aún más determinante en el sector energía debido a los grandes capitales en juego y a los largos períodos de desembolso y de recuperación de las inversiones.

Por ello, tan importante como una buena política es su estabilidad en el tiempo, sin la cual es imposible pretender una racional asignación de los recursos en la economía, ni

El nuevo Gobierno determinó que era necesario que los siempre escasos fondos fiscales se destinaran preferentemente a resolver los problemas sociales y que fuera el sector privado el principal motor del desarrollo

una participación apreciable y eficiente de todos los sectores nacionales en el desarrollo.

3. INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR

Para que las políticas produzcan los resultados esperados, es necesario que exista una institucionalidad adecuada a dichos objetivos.

La institucionalidad incluye dos aspectos: la de los organismos y la de la legislación y normativa.

Describiremos brevemente estos dos tipos de institucionalidad del sector energía en nuestro país.

a. Organismos del Estado

La Comisión Nacional de Energía (CNE)

Está a cargo de un Secretario Ejecutivo que depende de un Consejo formado de siete Ministros (el Presidente, los Ministros de Hacienda, Economía, Minería, Planificación, y

Defensa y el Secretario General de la Presidencia de la República). Le corresponde proponer las políticas, leyes y normas para el sector, calcular los precios que deben ser regulados (ellos son fijados por el Ministerio de Economía) y efectuar la planificación estratégica indicativa de cada subsector. Esta planificación es obligatoria para las empresas estatales.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

Depende del Ministerio de Economía y su función es controlar que las empresas y los equipos y materiales cumplan con la legislación y la normativa vigentes.

Para el caso de la generación de electricidad, la ley creó otro organismo importante: el **Centro de Despacho Económico de Carga**. Está formado por representantes de todas las empresas generadoras de cada Sistema Interconectado. Tiene por función hacer operar las centrales generadoras de modo de mantener la seguridad del servicio y obtener el mínimo costo de generación y falla. Este organismo está supervisado por la CNE.

b. Legislación normativa

Existe una legislación clara y no discriminatoria que establece las reglas del juego, tanto a nivel general de las relaciones económicas como en particular para el sector energía. Ella permite al sector privado nacional y extranjero conocer claramente cuáles son sus posibilidades, sus derechos y sus obligaciones. En relación con los subsectores, esta legislación establece lo siguiente:

Electricidad: Existe libertad para construir centrales generadoras y líneas de transmisión. Sólo se requiere concesión del Estado si las obras están en terrenos fiscales. Naturalmente, las centrales hidráu-

Tan importante como una buena política es su estabilidad en el tiempo, sin la cual es imposible pretender una racional asignación de los recursos en la economía, ni una participación apreciable y eficiente de todos los sectores nacionales en el desarrollo

licas necesitan disponer de los derechos de aguas. La distribución eléctrica siempre requiere concesión. Los precios de la electricidad son libres para los consumidores de potencias superiores a 2000 kw (consumen el 40% del total de electricidad) y regulados para los demás. Esta regulación está clara y objetivamente definida en la ley y permite a las empresas eléctricas utilidades razonables.

Carbón: Existe libertad para explotar, importar y vender carbón. Los precios son libres.

Petróleo y gas: De acuerdo con la Constitución, el Estado es propietario de los yacimientos petrolíferos. Sin embargo, puede conceder contratos de operación para que firmas privadas puedan hacer prospecciones y vender una parte del petróleo y gas encontrados. La refinación y distribución del petróleo, sus derivados y del gas son libres, así como sus precios de venta, salvo el caso de monopolios (sólo existe un caso en Punta Arenas).

4. NUESTRA VISION DEL FUTURO DEL SECTOR

El desarrollo del sector en Chile exige inversiones de unos US\$500 millones al año, cifra importante para nuestro país.

Las señales que ha recibido el Gobierno son muy alentadoras en

relación con el interés privado en desarrollar proyectos energéticos.

Las empresas eléctricas privatizadas tienen inversiones en curso por más de US\$1 mil millones en tres centrales en proceso de construcción. Además, existen empresas privadas que ya están tomando decisiones por invertir otros US\$1 mil millón en tres nuevas centrales (una a carbón), con las que la demanda eléctrica podrá ser abastecida hasta 1998.

En el sector hidrocarburos hay interés privado en invertir en refinerías, en utilizar el gas de Magallanes (amonio-urea), en construir un gasoducto para tener gas natural de Argentina, etc. Este último proyecto está en etapa de negociaciones con la contraparte argentina y, de ser exitosa, su construcción se iniciaría rápidamente.

El total de proyectos en que hay interés privado en abordar sobrepasa los US\$2 mil millones en los próximos cuatro o cinco años.

Si a ello se unen los proyectos privados en minería y el sector de la madera, se sobrepasa la cifra de US\$10 mil millones en el período.

Por ello, el Gobierno está convencido de que la sana situación económica del país, la claridad y estabilidad de sus políticas y de la legislación vigente y la experiencia y capacidad de nuestros profesionales y empresarios permitirán que el sector

privado nacional y extranjero tomen un papel cada vez más relevante en el sector energía, al igual que en los demás sectores económicos.

5. COMENTARIOS FINALES

Una política como ésta no es fácil ponerla en marcha y sin duda exige sacrificios por parte de la población. Todo ello en mayor medida si ya había una larga cultura de intervención del Estado y de precios subsidiados, como en el caso de muchos países.

A pesar de que cada vez hay más consenso de que el Estado puede y debe dirigir eficientemente la economía y no actuar directamente en los procesos productivos, aún se encuentran resistencias apreciables en muchos sectores.

En primer lugar, de parte de los trabajadores de las empresas estatales y aún de sus ejecutivos, que creen perder estabilidad y poder con la privatización; pero aún más, existen muchos empresarios que prefieren la discrecionalidad del Estado si eso los beneficia.

Finalmente, si los precios son subsidiados, el alcanzar niveles de precios reales exige un sacrificio a todo el país.

Por ello, para implementar esta política se requiere de convicción, decisión política y liderazgo.

Energy Sector: The Chilean Experience*

Sergio Lorenzini**

In order to understand the energy sector policies implemented in Chile in the past and currently being applied by the Government, one would have to begin by providing a brief summary of the evolution of our country's energy sector.

1. SUMMARY OF THE CHILEAN ENERGY SECTOR

a. Brief historical account

The energy sector has, from its very beginnings, been highly dynamic in our country. Its industrial development began in the middle of the past century with coal and, in the last decades of the century, with electricity. It should be noted that various applications of electricity were initiated in Chile almost at the same time as in the major industrialized countries. The first public electric lighting, for example, was installed in 1883 and the first hydroelectric power station in 1897.

Until 1940, energy development was handled exclusively by private enterprises, both Chilean and foreign, which were able to achieve high rates of growth until 1930 (annual average of 17%).

The world crisis of 1930, which dramatically affected our country, and the Second World War curtailed the financial capacity of the utilities, which were unable to continue

investing. Because of this, beginning in 1940, the State was forced to assume responsibility for a large part of the electric power development and oil exploration through two state-owned enterprises, ENDESA and ENAP, respectively. In any case, the private sector continued to invest in the energy sector until 1970.

Between 1970 and 1973, virtually all energy companies were nationalized, and this situation remained unaltered until 1980. The seventies were therefore the decade of total nationalization.

Beginning in 1980, a rapid process of privatization of state-owned enterprises was initiated so that, by the beginning of the current Government's administration, most of the utilities were privately owned and operated.

b. Sector's current situation with respect to company ownership

Electricity: More than 80% of public electric service is handled by private generation companies. Within the Central Interconnected System, which covers 90% of the population, there is only one state-owned enterprise, which is generating less than 20% of that demand. All electricity distribution is private. It should be noted that almost 70% of all electricity stems from hydropower sources.

Coal: There is only one state

company, which is producing 30% of the demand. All the other companies are private.

Petroleum: Oil production and refining are handled by one state enterprise, ENAP. Nevertheless, there are five mixed enterprises, with minority shareholding by ENAP, which are conducting oil exploration to produce and sell oil. All the distribution of oil products is private.

c. View of future supply possibilities

- Hydropower reserves are quite substantial in our country. Only 10% of hydropower's economic reserves have been used.
- Coal reserves are enormous (more than 5 billion tons) enough to meet the country's needs for several centuries.
- National oil production, however, is decreasing considerably due to the depletion of known reserves in Magallanes and, at present, accounts for less than 20% of the country's consumption.

2. GOVERNMENT POLICY IN THE SECTOR

a. General policy aspects

The Government's policy in the energy sector is, of course, consistent with its general economic policy.

* Lecture at the Institute of the Americas in June 1990.

** Executive Secretary, National Energy Commission of Chile

One of the first aspects that the economic team had to define before taking office was the role that the State should play in the economy. For this purpose, the parties that make up the present Government conducted a deep analysis of national reality. It was apparent that, in spite of the discussions that took place in the last 20 years concerning the country's economic performance, we were faced with clear, positive facts.

The general economic situation is sound. There has been virtually no fiscal deficit in the last few years. Inflation is under control, with reasonable rates for our country. The prices for goods and services have not been distorted: they are freely determined by domestic and foreign competitiveness and market forces. Only the prices of monopolies (such as electricity) are regulated. The economy has been open to outside trade for many years, with low customs duties (15%). Finally, in the last few years, there has been an appreciable growth of gross domestic product.

A solid base has therefore been established, undoubtedly

achieved through the sacrifice of all Chileans, especially the poorest.

Nevertheless, it is necessary to consider some distressing aspects which should be controlled: the high level of foreign indebtedness; the economic situation of the poorest sectors; and the need to maintain an economic growth rate that would permit these problems to be resolved and enable the country to emerge from underdevelopment. The new Government has determined that the State's forever meager fiscal revenues should be geared, preferentially, toward coping with social problems and that the private sector should become the major driving force behind development.

In order to achieve this, the Government has adopted a clear policy aimed at promoting the greatest involvement possible of the private sector in the country's development. This would enable it to focus its fiscal earnings on housing, education, health, and other assistance to the poorest sectors and to finance those activities that private enterprise would find it difficult to assume (such as public works).

The Government is aware that the issue of private and state participation in the economy has given rise, in our country, to debates that are sometimes quite vehement. It is also aware that the action of state enterprises was efficient and even necessary in the past owing to the above-mentioned circumstances.

Nevertheless, in our country and in the world as a whole, events have occurred that need to be appreciated. One of these is the extraordinary progress made in the knowledge of the economy and managerial and computer techniques. The achievements in these disciplines have become invaluable tools for managing the economy and orienting development.

These tools have confirmed the following assertions currently under discussion:

- The State can efficiently direct and control the country's economy and development, without having to participate directly in productive processes through state-owned enterprises.
- Greater economic efficiency can be obtained by an appropriate decentralization of the productive and administrative processes, within a competitive economic system, in which the various economic actors and agents assume responsibility for the risks and benefits of their own decisions.
- In the end, the always scarce resources of the State are more profitable for the country if they are efficiently aimed at improving the population's social and cultural conditions and invested in other activities that pertain to the State's mission of ensuring the common welfare. This task turns out to be more efficient for the country than investing these resources directly in productive processes.

b. Policy for the energy sector

The Government's policy for the energy sector therefore relies on four basic pillars:

1. **Promotion of maximum involvement of the private sector** in the energy sector's development, in order to convert it into the economy's main driving force. The State should directly develop projects only when the private sector clearly shows its incapacity to do so.
2. **Pricing policy.** Prices should be in keeping with real production and distribution costs and should be determined by domestic and foreign competitiveness of the various energy products. All of these products are therefore entitled to unrestricted importation, with low customs duties, as all other goods. The Government is interested in promoting the greatest degree of competitiveness possible.

One of the first aspects that the economic team had to define before taking office was the role that the State should play in the economy

Price controls only exist for monopolies, such as electric power distribution, which is the most outstanding example. This control is carried out taking into account the real costs of the products, including a reasonable return and through competitive market simulation systems (marginal costs).

3. **Role of the State.** The State's basic role is to provide standards, promote, and regulate. In view of the importance of energy, the State should ensure a timely and harmonious development of the sector, so that demand can be met at the lowest possible costs. To this end, the State should establish standards and rules of the game which utilities should comply with, and it should also ensure that they are enforced.

Moreover, because of the energy sector's special characteristics, one of which is the long periods of time required for developing its projects, the State should conduct suitable strategy planning studies and make the background data and results of these studies available to the interested parties.

4. **Policy stability.** This is an essential aspect, because only a policy's stability over time can yield the benefits that are expected from it. This is all the more true for the energy sector owing to the large amounts of capital that are involved and the long periods of time required for disbursing and recovering investments.

Because of this, a good policy also requires stability over time, without which it is impossible to attempt a rational allocation of resources in the economy or a substantial and efficient participation of all national sectors in development.

The new Government has determined that the State's forever meager fiscal revenues should be geared, preferentially, toward coping with social problems and that the private sector should become the major driving force behind development

3. SECTOR'S INSTITUTIONALIZATION

So that the policies will produce the results that are expected, an adequate institutional structure is needed to implement their objectives.

Institutional structure comprises two aspects: the structure of government agencies and the legal and normative framework.

We will briefly describe these two kinds of institutional structures of our country's energy sector:

a. State agencies

National Energy Commission (Comisión Nacional de Energía - CNE)

Headed by an Executive Secretary who relies on a Council composed of seven Ministers (the President of the Republic, the minis-

ters of Finance, Economy, Mining, Planning, and Defense, and the Secretary General of the Office of the President). Its functions entail the proposal of policies, laws, and standards for the sector, the calculation of prices that should be regulated (they are set by the Ministry of Economy), and elaboration of the planning strategy suitable for each subsector. This planning is obligatory for state-owned enterprises.

Superintendence of Electricity and Fuels (Superintendencia de Electricidad y Combustibles - SEC)

It is a branch agency of the Ministry of Economy, and its functions involve ensuring that enterprises and materials and equipment comply with standing legal regulations and standards.

For the generation of electricity, the law created another important agency: the **Center for Economic Load Dispatch** (Centro de Despacho Económico de Carga). It consists of representatives from all the generating utilities of each interconnected system, and its functions entail the operation of generation power stations in order to maintain service security and obtain minimum generation costs and power failures. This agency is supervised by the CNE.

b. Legislation and standards

There is a clear and nondiscriminatory legislation that determines the rules of the game, regarding both general economic relations and the particular relations of the energy sector, which enable the national as well as foreign private sectors to clearly know what their possibilities, rights, and obligations are.

Concerning the subsectors, this legislation has established the following:

Electricity. There is freedom to build generating stations and trans-

A good policy also requires stability over time, without which it is impossible to attempt a rational allocation of resources in the economy or a substantial and efficient participation of all national sectors in development

mission lines. A concession from the State is required only when the works involved are located on public land. Of course, hydropower stations need to obtain water rights. Distribution of electricity always requires a concession. Electricity prices are freely determined for customers who consume power over 2000 kw (which account for 40% of total electricity) and are regulated for all other consumers. This rule is clear and objectively defined by law and enables utilities to obtain reasonable returns.

Coal. There is freedom to exploit, import, and sell coal. Prices are freely determined.

Oil and gas. According to the Constitution, the State is the owner of all oil deposits. Nevertheless, it can grant operation contracts to private enterprises so they can conduct prospecting and sell part of the oil and gas discovered. The refining and distribution of oil, its products, and gas are free market activities, as well as their sales prices, except in the case of monopolies (there is only one case in Punta Arenas).

4. OUR OUTLOOK FOR THE SECTOR

The development of the sector in Chile requires investments of about US\$500 million per year, a considerable figure for our country.

The signals received by the

Government concerning private sector interest in developing energy projects are highly promising.

Privatized electric utilities have current investments that amount to more than US\$1 billion in three stations under of construction. Moreover, there are private enterprises that are already making decisions to invest an extra US\$1 billion in three new power stations (one of which is coal-fired), which would ensure electric power demand up to 1998.

In the hydrocarbons subsector, the private sector is interested in investing in refineries, in using the gas of Magallanes (ammonia-urea), in building a gas pipeline to have natural gas from Argentina, etc. This latter project is under negotiation with the Argentine counterpart and, if it is successful, construction would begin immediately.

Total projects in which the private sector is interested amount to more than US\$2 billion during the next four or five years.

If private projects in the mining and wood subsectors are added to these, the figure for this period would amount to more than US\$10 billion.

Because of this, the Government is convinced that the country's sound economic situation, the clarity and stability of its current policies and standing legislation, and the experience and skills of its professional experts and entrepreneurs will enable

the national and foreign private sector to play an increasingly greater role in the energy sector, as well as in other economic sectors.

5. FINAL COMMENTS

A policy of this kind is difficult to implement and undoubtedly entails sacrifices from the population, all the more so when, as in the case of most countries, there has already been a long tradition of State intervention and subsidized prices.

Although there is increasingly greater consensus that the State can and should efficiently direct the economy rather than directly involve itself in productive processes, there still remain considerable forces that are resisting this trend in many sectors.

First of all, the workers and personnel of state-owned enterprises, as well as their executives, who believe they will lose job security and power with privatization, are showing signs of resistance. There are also many entrepreneurs who prefer the State's discretionary powers when these are to their advantage.

Finally, if prices have been subsidized in the past, the shift to real prices demands a sacrifice on the part of the entire country.

In order to implement this policy therefore, conviction, political will, and leadership are required.